

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

DEMANDANTE	: FABIOLA DE JESÚS HERNÁNDEZ ARANGO
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL	: 05001-31-05-015-2021-00500-02
RADICADO INTERNO	: 058-23
DECISIÓN	: CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 085

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

Se reconoce personería a la Dra, LILIANA CHÁVES ORTEGA, como apoderada de Colpensiones según el poder de sustitución allegado y por cumplir con los requisitos del artículo 75 y ss del C.G.P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

Mediante auto del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Quince Laboral de este Circuito, libró el mandamiento de pago solicitado por el ejecutante y en contra de COLPENSIONES por la suma de \$42.744.826 por concepto de retroactivo pensional, entre el 7 de agosto de 2017 al 30 de junio de 2020, por las mesadas pensionales a partir del mes de julio de 2020, en la suma de \$1.165.114, y por la indexación de las condenas.

Posteriormente luego de haberse resuelto las excepciones propuestas por la entidad demandada, la parte ejecutante mediante escrito del 02 de febrero de 2023 solicitó se decretara la medida de embargo en las cuentas que tiene la entidad demandada en las siguientes entidades bancarias:

- BANCO DAVIVIENDA.
- BANCO DE OCCIDENTE

La anterior solicitud fue resuelta de forma negativa por el Juzgado mediante auto del 03 de febrero de 2023, (PDF 36), argumentado para ello la inembargabilidad que tienen las cuentas que posee la ejecutada en dichas entidades financieras.

Posteriormente mediante escrito del **14 de febrero de 2023** la parte ejecutante allega nueva solicitud mediante la cual reitera la solicitud de la medida de embargo, indicando para ello que en la cuentas de la entidad demandada COLPENSIONES no solo hay dinero de la seguridad social, sino que también proviene de su propia administración y que está destinado para el pago de las sentencias judiciales, patrimonio propio, nómina, etc., y que el Despacho antes de negar la medida de embargo solicitada, debió indagar primero si las cuentas que se describen en la demanda pertenecen al patrimonio propio o están destinadas al pago de la seguridad social.

Cita como sustento a su favor la Sentencia del Tribunal Superior de Pereira, Magistrada Ponente OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA, Acta No. 44 de 08/05/2018, donde resolvió un caso similar, y como lo era ver si era viable o no proceder con la medida de embargo frente a costas e intereses moratorios, indicando además que, en ese orden de ideas, el embargo de los recursos públicos cuando existen acreencias de naturaleza laboral es procedente.

Cita además apartes de la sentencia T 048 de 2019, y por último solicita que SE DECRETE LA MEDIDA DE EMBARGO del crédito restante y que pertenece a un saldo correspondientes a intereses moratorios, derecho que quedó plasmado en la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín que concedió la pensión de sobrevivientes junto con los intereses moratorios.

A la anterior solicitud se le dio tramite mediante auto del 14 de febrero de 2023 (PDF 38), donde remitiendo a la parte ejecutante a lo dispuesto en auto del 3 de febrero de 2023, en donde se resolvió la petición de medida cautelar.

### **RECURSO DE APELACION.**

Ante lo anterior el apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación mediante escrito del 16 de febrero de 2023, (PDF 39), reiterando los mismos argumentos ya expuestos en el escrito del 14 de febrero de 2023.

Luego mediante auto del 21 de febrero de 2023, (PDF 40), negó el recurso de reposición y en su lugar concedió el recurso de apelación interpuesto.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**La apoderada de Colpensiones** solicita se confirme la decisión de primera instancia del día 3 de febrero de 2023 en el cual se niega decretar el embargo de las cuentas bancarias de la entidad de Colpensiones, resaltando en síntesis que Colpensiones en diferentes informes reitera la inembargabilidad de los dineros que se encuentran en las cuentas bancarias de dicha entidad.

### **CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar si es procedente el embargo solicitado por la parte ejecutante, el cual se abordará en el siguiente orden.

En primer término, es necesario indicar que esta Sala siempre ha considerado que el embargo de una cuenta bancaria está condicionado a que no se trate de cuentas inembargables de las previstas en el artículo 134 de la ley 100 de 1993 o pertenecientes a la seguridad social, pues si estas están dentro de las previstas en el precepto no se podrá realizar la medida cautelar interpuesta.

Al respecto el artículo 134 de la ley 100 de 1993 reza en su numeral 2º :

*“ART. 134. **Inembargabilidad.** Son inembargables:*

*... 2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.”.*

Prohibición que igualmente se encuentra plasmada en el artículo 44 del Decreto 692 de 1994, al señalar:

*“ART. 44.—**Inembargabilidad.** Son inembargables los recursos de los fondos de reparto del régimen solidario de prima media con prestación definida y sus reservas. Así mismo, los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y sus respectivos rendimientos. No obstante, tratándose de cotizaciones voluntarias a fondos de pensiones y de sus rendimientos, sólo gozarán en materia de inembargabilidad, de los mismos beneficios que la ley concede a las cuentas de ahorro UPAC.”*

Lo anterior sin dejarse de lado, en cumplimiento de la excepción que permite que la ley, que el artículo 63 de la C.P, señala *“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación **y los demás bienes que determine la ley**, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.* (Resalto fuera del texto)

Frente a la regla general de inembargabilidad, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las Sentencias STL18606 del 14 de diciembre de 2016 Radicación 41347 y 31274 del 28 y 30 de enero de 2013, respectivamente, ha señalado la imposibilidad de aplicar medidas cautelares a bienes inembargables, pero que ello no es absoluto, frente a situaciones de personas de la tercera edad, que no cuentan con seguridad social, ni con recursos económicos para mantenerse.

Al respecto y de conformidad con lo señalado, la Sala considera que en principio son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, conforme el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que reza:

*“Inembargabilidad: Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.*

*“No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetaran en su integridad los derechos reconocidos a terceros con estas sentencias”.*

Esta situación, fue morigerada por la sentencia C-354 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, cuando dijo:

*“Es exequible el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que incorporó materialmente el artículo 6ª de la Ley 179 de 1994, bajo el entendido que los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencia o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento*

*que la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto – en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones cuando se trate de esa clase de títulos – y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.”*

Partiendo de lo anterior observa la Sala que no le asiste razón a la parte ejecutante en cuanto al recurso interpuesto cuando indica que el Despacho antes de negar la medida de embargo solicitada, debió indagar primero si las cuentas que se describen en la demanda pertenecen al patrimonio propio o están destinadas al pago de la seguridad social, toda vez que una vez revisada la demanda se observa que la solicitud de embargo se solicitó de forma general para las cuentas que tuviera Colpensiones en las referidas entidades financieras, sin que sea posible de esta forma determinar la cuenta específica y mucho menos si se trataba de una cuenta bancaria que no tenga que ver con la seguridad social y en consecuencia si era o no embargable, carga procesal esta que correspondía a la parte actora quien como mínimo debió haber indicado cual o cuales cuentas era sobre las que pretendía el embargo para que en caso tal el despacho procediera a realizar las gestiones y requerimientos pertinentes a la entidad financiera con el fin de determinar la embargabilidad o no de dichas cuentas, lo anterior conforme el artículo 73 N°10 del CGP.

Además de lo anterior se observa que la solicitud de que el juzgado debería de haber indagado si las cuentas de Colpensiones pertenecen al patrimonio propio o están destinadas al pago de la seguridad social para determinar la embargabilidad de estas, no es una solicitud que sea susceptible de recurso de apelación pues esto es un acto de trámite o sustanciación del despacho frente al cual no existe recurso de apelación conforme lo estipulado en el artículo 65 del C.P.T y ss.

Por lo anterior se deberá CONFIRMAR la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, pero por las razones argumentadas en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelve el recurso

**EL FALLO DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** la providencia emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, que negó la solicitud de medida cautelar pretendida por la parte ejecutante, pero según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia

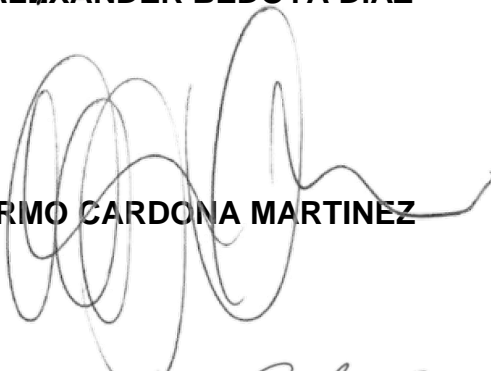
**TERCERO:** Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo.

**CUARTO:** Lo resuelto se notifica en ESTADOS.

Los Magistrados,



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTINEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 056 del 31 de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>